



## INFORME JURÍDICO

### **INFORME SOBRE EL IMPACTO DEL REAL DECRETO-LEY 6/2023, DE 19 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA EN MATERIA DE SERVICIO PÚBLICO DE LA JUSTICIA, FUNCIÓN PÚBLICA, RÉGIMEN LOCAL Y MECENAZGO, EN RELACIÓN CON EL PUNTO NEUTRO JUDICIAL, EL CONTROL DE LAS HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LA EMISIÓN DE ACTOS DE JUICIOS "EN ABIERTO"**

#### **I. ANTECEDENTES**

**1.-** Por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial se ha encomendado que se elabore un informe para ser presentado en el Pleno de la reunión del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica a celebrar el próximo 21 de junio en Zaragoza, que abarque los siguientes aspectos en relación con el contenido del Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre: la situación del Punto Neutro Judicial, el control de las herramientas de inteligencia artificial que vayan a ser utilizadas en la Administración de Justicia, y la emisión de los actos de juicios en "abierto" a través de Internet.

**2.-** Con carácter previo a abordar cada una de estas cuestiones, procede poner de relieve la postura que con anterioridad ha manifestado al respecto este Consejo General del Poder Judicial (en adelante, CGPJ).

**3.-** En la reunión de la Comisión Permanente del CTEAJE de 1 de diciembre de 2021, se puso de manifiesto sobre el anteproyecto de ley de eficiencia digital:

*"Que es necesario que, además del MJU, el CGPJ también pueda gestionar a través del servicio del PNJ la plataforma de interoperabilidad";*

*"Que la redacción de los juicios online quizás debería estar regulado en una ley orgánica al afectar al honor, intimidad, imagen y protección de datos, incluso valoran inaplicable desde el punto de vista práctico (Art.68) ante la imposibilidad de imponer multas cuando se realiza una grabación y publicación no autorizada";*

*"No aceptan que se plantee la posibilidad de que se realicen borradores de resoluciones judiciales, cuestionando quien realizaría el algoritmo y quien lo audita (Art.57)";*



*"Echan en falta alguna referencia a los derechos de las personas en relación a un documento del CEPEJ orientado al uso de inteligencia artificial, así como un precepto sobre la textualización y solicitan que se elimine la protección de datos de las personas jurídicas".*

**4.-** En la reunión del Pleno del CTEAJE celebrada el 24 de marzo de 2022 en Avilés respecto a la petición de datos para entrenamiento de soluciones de inteligencia artificial:

*"Que los datos que obran en un procedimiento judicial son datos estrictamente jurisdiccionales y de uso jurisdiccional, por lo que deben ser convenientemente anonimizados, siendo además el CGPJ la autoridad de protección de datos, por lo que debe pronunciarse expresamente sobre esta cuestión. Si se va a textualizar cualquier documento judicial en sentido amplio, los datos que se contienen son datos jurisdiccionales";*

*"Que el CGPJ como máxima autoridad de protección de datos dentro de la Administración de Justicia, (con la existencia de la Dirección de Supervisión y Control del CGPJ tras la entrada en vigor de la LO 7/2021) solicita que para la realización de dichas consultas a distintas herramientas o usos de inteligencia artificial, se actúe del mismo modo que con la textualización, esto es, con la remisión de un documento en el que se describa el proyecto, así como la necesidad del uso de datos personales, que vaya acompañado además de una evaluación de impacto de protección de datos y con una descripción detallada de todo el proyecto. Informa que en enero se recibió una consulta por la SG CTEAJ para que se pronunciaran con carácter general, pero considera que estas herramientas deben ser tratadas y estudiadas de forma individual".*

**5.-** En la reunión de la Comisión Permanente del CTEAJE celebrada el 7 de marzo de 2024:

*"Es necesario elaborar un listado de iniciativas de inteligencia artificial (IA), con carácter previo a su desarrollo, para evitar duplicidades, facilitar la reutilización y permitir a las administraciones que puedan sumarse a las iniciativas en marcha de otros. Además, es necesario que se lleven a cabo evaluaciones de impacto con anterioridad a la puesta en marcha de los proyectos para salvaguardar los derechos fundamentales de todas las personas".*

**6.-** El 29 de mayo de 2024 se celebra la primera reunión constitutiva del grupo de trabajo sobre IA del CTEAJE en la cual, el CGPJ expone la necesidad de respetar la independencia judicial sobre aquellos proyectos que puedan afectarla, así como el pleno cumplimiento de la normativa de protección de



datos personales en la medida que se necesite para los proyectos acceder a documentación obrante en el sistema de gestión procesal para realizar entrenamientos.

El CGPJ manifiesta durante la celebración de esta reunión que su ámbito de actuación en este grupo comprende dos funciones: una, garantizar la independencia judicial de aquellos proyectos cuya finalidad sea el apoyo o ayuda a la actividad jurisdiccional, mediante el desarrollo e impulso de medidas para garantizarla; y otra, en estos proyectos que afectan también al tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, el asesoramiento en el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales con una hoja de ruta para ello. No obstante, en ambos casos esta participación es independiente tanto de la labor de inspección y control del CGPJ tanto sobre el uso de la IA como del efectivo cumplimiento de la protección de datos personales.

**7.-** Por otra parte, también procede traer a colación, de forma resumida y sin ser exhaustivo, algunos apartados del punto VI denominado “Conclusiones” del informe evacuado por el CGPJ sobre el anteproyecto de ley de eficiencia digital.

Empezando por lo referente al Punto Neutro Judicial, se puso de manifiesto que:

*“OCTAVA.- También en línea con esta dilución, cuando no desapoderamiento, de las atribuciones del Consejo es significativa la omisión en el texto proyectado de cualquier referencia, y más aún de regulación, del Punto Neutro Judicial. Aunque este instrumento no tiene una expresa regulación en la Ley 18/2011, pude encontrar su acomodo en su artículo 46.2, que establece que “[E]n el desarrollo de la oficina judicial será obligatorio el uso de los servicios y consultas ofrecidos a través de las plataformas de interoperabilidad establecidas por el Consejo General del Poder Judicial”.*

*Su existencia y funcionalidad queda sin embargo, difuminada y preterida en la ley anteproyectada, cuando, en cambio, su visibilidad, y la de la competencia del Consejo sobre dicho instrumento, además de necesitar una expresa y concreta regulación en el texto anteproyectado -siquiera sea mediante una salvaguarda de los servicios que preste el Consejo que favorezcan la comunicación entre órganos jurisdiccionales y el intercambio de información con organismos, instituciones y entidades con fines procesales-, debería quedar reflejada en numerosos lugares del mismo”.*

Respecto al control de las herramientas de inteligencia artificial:



*"NOVENA.- La preterición del Consejo General del Poder Judicial es especialmente significativa, y de ahí su relevancia, cuando el anteproyecto incorpora modelos y técnicas de inteligencia artificial a la tramitación electrónica sobre procedimientos judiciales y en particular al dictado de las resoluciones judiciales (cfr. Artículo 57). Sin perjuicio de la oportunidad de introducir estos modelos en el estado, tecnológico y procesal, pero también normativo, actual, las exigencias derivadas de los principios consagrados en el artículo 117 CE, y del artículo 24.1 CE, se impone la necesidad de los debidos controles, evaluaciones y las garantías adecuadas en la configuración, en la utilización y en el resultado de los mecanismos de inteligencia artificial aplicados a la función jurisdiccional, no solo en cuanto a los algoritmos empleados, sino también, y específicamente, en orden a salvaguardar el ejercicio de la función jurisdiccional, consustancial y ontológicamente anudada a la naturaleza humana, con independencia, imparcialidad, exclusividad y exclusivo sometimiento al imperio de la ley. Y en esa función de garantía, vinculada a la función de garantía institucional de la independencia judicial que representa el Consejo General del Poder Judicial, no puede orillarse la participación este órgano constitucional.*

*SEPTUAGESIMOPRIMERA.- El uso de la inteligencia artificial constituye, ciertamente, una herramienta que puede proporcionar utilidades relevantes en términos de eficiencia al sistema de Administración de Justicia, pero también entraña riesgos severos para la garantía de los principios fundamentales de nuestro Estado de Derecho. Por ello, en este campo el prelegislador debería mantener una posición de precaución y abordar el establecimiento de una regulación completa y garantista del uso de las técnicas de inteligencia artificial en el ámbito de la función jurisdiccional, en la que, en todo caso, este Consejo General del Poder Judicial, como órgano de gobierno del Poder Judicial y garante de la independencia constitucionalmente garantizada de Jueces y Magistrados, debe jugar un papel determinante".*

Y en cuanto a la emisión de los juicios en Internet en "abierto":

*"OCTOGÉSIMA.- Ha de ponerse de manifiesto la imposibilidad de equiparar, a los efectos de salvaguarda del principio de publicidad, la presencia física en una sala de audiencias con la retransmisión pública e indiscriminada a que se refiere el artículo 67.1 del Anteproyecto que, no obstante la referencia a las limitaciones del artículo 138.2 de la LEC a los efectos de que el Juez o Tribunal pueda "acordar la no retransmisión en la forma prevista por la ley procesal" o la prohibición de grabar, tomar imágenes o utilizar cualesquiera medios que permitan una posterior reproducción del sonido y/o de la imagen de lo*



*acontecido, que recoge el artículo 68.2 APL, resulta inconciliable con la necesidad de salvaguardar determinados derechos.*

*Ante la previsión recogida en el artículo 67.1 APL, que permitirá la difusión indiscriminada de los actos de juicio, vistas y otras actuaciones que se celebren telemáticamente, haciéndolas potencialmente accesibles a un muy elevado número de personas no identificadas ni fácilmente identificables, ha de plantearse que la regulación de dicha retransmisión se someta a determinados condicionantes, como pudiera ser la invitación, previa identificación de todo aquel que quisiera asistir, de manera análoga a la dinámica de actuación que se ha venido siguiendo en los actos celebrados durante la pandemia, los con lo que se respetaría igualmente el principio de publicidad de las actuaciones judiciales.*

*Asimismo, ha de ponerse de manifiesto que la retransmisión de estos actos puede suponer una afectación de derechos fundamentales como el honor, la intimidad, la propia imagen o la protección de datos personales de donde deriva que haya de sugerirse al prelegislador la conveniencia de que dicha previsión normativa sea objeto de la correspondiente y detallada regulación a través de una ley que revista carácter orgánico.*

*OCTOGESIMOPRIMERA.- En el apartado 1 del artículo 67, en el que el prelegislador atribuye al CTEAJE la competencia para establecer "la forma" en la que se retransmitirán públicamente las actuaciones, ha de llamarse la atención sobre esta genérica referencia que habrá de concretarse debidamente en el texto proyectado, limitándose a aspectos o especificidades técnicas, de manera coherente con las competencias del Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica, y sin suponer, en modo alguno, ningún tipo de intromisión en el ejercicio de la función jurisdiccional.*

*OCTOGESIMOSEGUNDA.- El artículo 67 APL olvida que la retransmisión pública de actuaciones que hayan de practicarse en audiencia pública puede acordarse igualmente cuando estas tengan lugar mediante presencia física, en aquellos supuestos en los que se entienda necesario para maximizar el principio constitucional de publicidad procesal previsto en el art. 120.1 CE y las garantías que este comporta, más allá de los límites que impone el espacio físico en el que se hayan de desarrollar dichas actuaciones, posibilitando con ello que resulten accesibles para cualquier persona interesada, y garantizando al mismo tiempo, el principio de transparencia al que está sujeto todo poder público y el derecho fundamental a comunicar y recibir información sobre un suceso de interés público. Como ejemplo puede citarse el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 16 de enero de*



*2016 por el que se adoptan determinadas medidas durante la celebración de la vista del juicio de la causa especial 3/20907/2017.”*

**8.-** El libro primero del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre (en adelante, RDL 6/2023 o RDL), bajo el título «Medidas de Eficiencia Digital y Procesal del Servicio Público de Justicia», contiene una extensa regulación que tiene por objeto la utilización de la tecnologías de la información por parte de los ciudadanos y los profesiones con la Administración de Justicia y en las relaciones de la Administración de Justicia con el resto de administraciones públicas y sus organismos públicos y entidades de derechos público vinculadas y dependientes (art. 1.1 RDL 6/2023) y que se integra en los artículo 1 a 100 del referido RDL.

La regulación del RDL en materia de eficiencia digital de la Administración de Justicia recoge el contenido del Proyecto de ley 12/000116 de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 12 de septiembre de 2022 y que decayó como consecuencia de la disolución anticipada del Congreso de los Diputados y del Senado por Real Decreto 400/2023, de 29 de mayo.

## **II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS**

### **a) La posición competencial del Consejo General del Poder Judicial en el desarrollo e implementación del RDL 6/2023**

**9.-** El Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno del Poder Judicial, que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional (art. 558 LOPJ), tiene constitucionalmente atribuida como función esencial la de ser «una garantía específica de la independencia judicial» (STC 128/2023, de 2 de octubre, FJ 4). En este sentido, como afirma la jurisprudencia constitucional, «el Consejo General del Poder Judicial (y no el Gobierno de la Nación, ni las Comunidades Autónomas) es el único órgano constitucionalmente llamado a desempeñar las funciones que la LOPJ, dentro de la reserva constitucional establecida en el art. 122.2 CE, contempla en relación con el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados, al fin de salvaguardar la independencia judicial del área de influencia del Poder Ejecutivo.» (STC 105/2000, de 13 de abril, FJ 4).

**10.-** En el marco de la distribución de competencia y responsabilidades sobre la provisión de medios tecnológicos al servicio de la Administración de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial desempeña un papel nuclear



con un carácter bifronte. Por un lado, la Ley Orgánica del Poder Judicial le atribuye competencias para la determinación de la utilización por parte de Jueces y Magistrados de los medios tecnológicos puestos al servicio del ejercicio de la función jurisdiccional, así como para la homogeneización de las condiciones normativas que en desarrollo de las previsiones de la LOPJ precise el empleo de los medios tecnológicos que incidan en las materias reservadas a las potestad reglamentaria del Consejo General del Poder Judicial. Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial como autoridad de control de protección de datos respecto de los tratamientos de datos con fines jurisdiccionales desempeña las funciones previstas en el artículo 236 octies LOPJ en relación con el artículo 57 del Reglamento general de protección de datos (Reglamento 2016/679, de 27 de abril).

**11.-** El artículo 230 LOPJ constituye la piedra angular de la incorporación de los medios tecnológicos en la Administración de Justicia. Este precepto orgánico es la norma de cabecera del complejo normativo regulador de la prestación y uso de medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la Administración de Justicia, de modo que las distintas normas sobre esta materia no sólo deben ajustarse a lo establecido en él, sino que deben respetar la reserva establecida en el artículo 122.1 CE en favor de la Ley Orgánica del Poder Judicial y acomodarse en su interpretación y aplicación a las prescripciones contenidas en ella. En las sucesivas redacciones de este precepto desde su redacción original (Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre; Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio; y, la Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre), las competencias del Consejo General del Poder Judicial han variado en alcance y amplitud hasta llegar a la redacción vigente en la que en el apartado 1 de la artículo 230 LOPJ establece que los juzgados y tribunales están obligados a utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, puestos a su disposición para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones. El apartado 2 del mismo artículo prevé que las instrucciones generales o singulares de uso de las nuevas tecnologías que le Consejo General del Poder Judicial dirija a los/as jueces/zas y magistrados/as, determinado su utilización, serán de obligado cumplimiento.

**12.-** A partir de contenido normativo del artículo 230 LOPJ este Órgano constitucional a través de la Instrucción 1/2018, relativa a la obligatoriedad para Jueces y Magistrados del empleo de medios informáticos, aprobado por Acuerdo de 22 de noviembre de 2018 (BOE núm. 297, de 10 de diciembre de 2018), ha establecido que cabe derivar tres consecuencias inmediatas: el uso de los medios indicados es obligado en juzgados y tribunales; la determinación de su utilización por jueces/zas y magistrados/as corresponde



al Consejo General del Poder Judicial mediante el dictado de las correspondientes instrucciones generales y particulares; y los/as jueces/zas y magistrados/as están obligados a cumplir esas instrucciones, de manera que no hacerlo supondrá la comisión de infracción disciplinaria de desatención o incumplimiento de los deberes del cargo.

**13.-** De acuerdo con la referida Instrucción, la aprobación de los programas y sistemas informáticos corresponde a las administraciones prestacionales (art. 37.1 LOPJ), pero su utilización no podrá imponerse como obligatoria a jueces/zas sin o se satisfacen los requisitos técnicos los requisitos técnicos que permiten imponer esa obligación. El examen de esos requisitos técnicos tiene como finalidad verificar que a través del correspondiente programa informático de gestión procesal no se alteran las condiciones del puesto de trabajo del juez o magistrado ni se perjudican los ritmos de trabajo esperables, ni se alteran las previsiones de la legislación procesal, así como comprobar, que dada la fragmentación territorial d de la competencia en «administración de la Administración de Justicia, la diversidad de programas y medios técnicos, no supongan diferencias de cargas de trabajo de jueces y magistrados en función del territorio donde desempeñen su actividad.

**14.-** De acuerdo con el punto quinto de la Instrucción 1/2018, la no superación del test de requerimientos técnicos, de tramitación y formación, configurado en la misma, determinará que el uso de los programas no será obligatorio para jueces y magistrados.

**15.-** El artículo 230 LOPJ atribuye, de este modo, al Consejo General Poder Judicial una responsabilidad basilar en la puesta a disposición de jueces y magistrados de los medios tecnológicos prestados por las administraciones con competencias en materia de administración de la Administración de Justicia en cuyo desempeño debe verificar que los elementos técnicos de los programas y sistemas no supongan un condicionamiento o alteración del estatuto jurídico de los miembros del Poder Judicial. Se puede afirmar que el Consejo desempeña, al amparo del artículo 230 LOPJ, una suerte de función de *gatekeeper* de la utilización por jueces y magistrados de los medios tecnológicos a su servicio como garante de la independencia judicial. El artículo 230 LOPJ habilita al Consejo General del Poder Judicial a desarrollar una actuación de garante de esa independencia en relación con los desarrollos de programas de inteligencia artificial al servicio de la Administración de Justicia, como se expondrá más ampliamente más adelante.

**16.-** Junto a esta competencia del artículo 230 LOPJ, interesa subrayar que el artículo 560.1.16ª LOPJ atribuye al Consejo General del Poder Judicial la potestad reglamentaria para el desarrollo normativo de la Ley Orgánica del





Poder Judicial en un conjunto de materias como órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales, publicidad de las actuaciones judiciales, publicación y reutilización de las resoluciones judiciales, habilitación de días y horas, así como fijación de horas de audiencia pública, reparto de asuntos y ponencias, entre otras. Mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria el Consejo establece para estas materias un marco normativo homogéneo y uniforme para todo el territorio que se configura, además, como exclusivo y excluyente de cualquier intervención o interferencia de otras administraciones.

**17.-** En este sentido, algunas previsiones del Real Decreto-ley 6/2023 se proyectan sobre ámbitos regulados por la LOPJ (por ejemplo, sistemas de información y comunicación empleado por los órganos de gobierno interno del poder judicial [art. 35 RDL] o la modalidad *on line* de la publicidad de los actos procesales [art. 66 y 67 RDL]) cuyo desarrollo normativo corresponde al Consejo General del Poder Judicial conforme al artículo 560.1.16ª LOPJ. De este modo, en relación con las materias consignadas en el referido precepto orgánica, entre las prescripciones normativas contenidas en el Real Decreto-ley 6/2023 y las remisiones al establecimiento por el CTEAJE de las especificidades o criterios técnicos para su aplicación, se inserta necesariamente la posibilidad de una norma reglamentaria del CGPJ que determine con carácter homogéneo y uniforme las condiciones normativas en que deberán satisfacer los correspondientes medios tecnológicos.

**18.-** Por último, la dimensión de tratamiento de datos personales que comporta el desarrollo y puesta a disposición de medios tecnológicos al servicio de la Administración de Justicia determina que el Consejo General del Poder Judicial deba estar presente en todo ese proceso en ejercicio de sus funciones como autoridad de control de protección de datos, al amparo del artículo 236 octies LOPJ y artículo 55 Reglamento general de protección de datos.

### **b) La ausencia del Punto Neutro Judicial en el contenido del Real Decreto-ley 6/2023.**

**19.-** Como es sabido, la constitución y puesta en funcionamiento del Punto Neutro Judicial se adoptó por acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 20 de febrero de 2002. Esta herramienta se configura como una red de comunicaciones que soporta una plataforma de servicios que permite consultar e interconectar a los órganos judiciales con terceros, como Administraciones públicas, Colegios profesionales, entidades financieras o registros públicos, al objeto de mejorar los tiempos de tramitación de los asuntos competencia de los juzgados y tribunales, y en suma, para el mejor



ejercicio de la función jurisdiccional y una mejor prestación de la administración de Justicia. El Punto Neutro Judicial constituye, al mismo tiempo, un instrumento que permite el cumplimiento de la obligación legal de comunicarse electrónicamente con la Administración de Justicia, de forma segura, y a la vez posibilita la realización del objetivo de una mejor y más eficaz administración de Justicia.

**20.-** Así, y a modo de ejemplo, citar que se puede obtener información de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (cuentas bancarias, ingresos y pagos, fondos de inversión, IAE, transmisión de valores), Dirección General del Catastro (titular catastral y gráfico catastral), Tesorería General de la Seguridad Social (vida laboral, prestaciones), Instituto Nacional de Estadística (domicilio patronal), Servicio Público de Empleo (prestaciones), Dirección General de Tráfico (antecedentes, vehículos, conductores), Dirección General de la Policía (DNI), así como la consulta con la mayor parte de las entidades bancarias que operan en España (cuentas a la vista, activos financieros).

La relevancia de esta herramienta viene dada por los datos sobre su utilización durante el año 2023, habiéndose realizado 38.098.652 peticiones sin incluir a las entidades financieras; 68.540.084 realizadas a las entidades financieras; siendo 180.316 los procedimientos en base a los cuales se han efectuado consultas por los usuarios existentes, que son 30.389.

Además, también se debe destacar la labor su utilización en relación con los embargos, cuyas cuantías en los últimos años de desglosan a continuación:

AÑO	Cantidad conseguida	Cantidad intentada
2018	125.676.546,78 €	22.010.172.249,01 €
2019	423.744.927,37 €	59.651.088.917,94 €
2020	368.622.372,38 €	49.824.739.593,29 €
2021	455.412.244,46 €	66.945.114.542,53 €

**21.-** En la Ley 18/2011 se contenía una referencia al Punto Neutro Judicial al referirse en su artículo 46.2 a «las plataformas de interoperabilidad establecidas por el Consejo General del Poder Judicial». En el referido precepto se disponía que «en el desarrollo de la actividad de la oficina judicial



será obligatorio el uso de los servicios y consultas ofrecidos a través de las plataformas de interoperabilidad establecidas por el Consejo General del Poder Judicial y por las Administraciones competentes en materia de Administración de Justicia, salvo que existan razones técnicas que impidan su utilización».

Cabe añadir que el Punto Neutro Judicial se sustenta en una serie de convenios de colaboración, entre ellos, el Convenio Marco entre el Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa y Fiscalía General del Estado para la utilización de la plataforma de servicios del Punto Neutro Judicial del año 2022, así como el Acuerdo de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía Europea, con similar finalidad y también del mismo año, que están vigentes y no han sido denunciados por ninguno de los firmantes.

En el RDL 6/2023, en cambio, no se contiene ninguna referencia expresa a la existencia de esta red de comunicaciones gestionada por el CGPJ.

**22.-** La nueva norma, en su Exposición de Motivos, justifica su extraordinaria y urgente necesidad en la implementación de una serie de reformas legislativas necesarias para obtener el cuarto desembolso de los fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación de España, aprobado por la Comisión Europea el 13 de julio de 2021. Este plan contiene 212 medidas, siendo 110 inversiones y 102 reformas, formando parte del pilar digital, entre otros, la digitalización de la Administración Pública, incluyendo los sistemas de justicia. Así, se contempla como “Reforma 2 (C11.R2): Reforma para el impulso del Estado de Derecho y la eficiencia del servicio público de justicia”, que incluye la aprobación de diferentes normas: Ley de eficiencia procesal (*“a fin de acortar la duración de los procedimientos en todas las jurisdicciones, preservando al mismo tiempo las garantías procesales de los ciudadanos, así como el establecimiento de medios alternativos adecuados de solución de controversias”*); reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (*“con el fin de asignar la dirección de la investigación judicial a los fiscales, en lugar de estar dirigida por los jueces de instrucción”*); Ley de eficiencia digital (*“que promueve una arquitectura basada en datos para gestionar la información”*); y Ley de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia (*“para modificar la organización del mapa judicial, sustituyendo el elevado número de tribunales de primera instancia por 431 órganos colegiados - Tribunales de Instancia- e implantará la Oficina Digital”*). Las dos primeras leyes, a más tardar el 31 de diciembre de 2022; las otras dos, a más tardar el 31 de diciembre de 2023.



Estas reformas legislativas se complementan con la "Inversión 2 C11:I2): Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado", del que forma parte "Sistema de justicia. La inversión proporcionará a los ciudadanos y operadores jurídicos herramientas digitales para gestionar mejor su relación con la administración de justicia", terminado la inversión realizada a tal efecto a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

**23.-** Fruto de todo ello, a través del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), cuya presidencia tanto de su Pleno como Comisión Permanente se ejerce en la actualidad por representantes del CGPJ, se ha llevado a cabo la coordinación entre todas las Administraciones prestacionales, tanto Ministerio de Justicia como Comunidades Autónomas con competencia en justicia, sobre la descripción de proyectos a financiar. Estos proyectos son:

- Interoperabilidad.
- Justicia orientada y basada en datos.
- Estadística judicial automatizada.
- Ciberseguridad.
- Carpeta justicia.
- Inmediación digital.
- Textualización.
- Medios adecuados de solución de controversias (MASC).
- Gestión de efectos judiciales.
- Gestión de personal.
- Agenda programada de señalamientos.
- Textualización e inteligencia artificial.
- Gestión de archivos electrónicos.
- Sistema común de comunicaciones electrónicas.

Se debe matizar que, aunque el CGPJ ostente la Presidencia del Pleno y Comisión Permanente del CTEAJE, no ejerce funciones decisorias sobre los proyectos a financiar con fondos europeos, los cuales, además son finalmente aprobados en el marco de la Conferencia Sectorial de Justicia, en la que precisamente el CGPJ no participa.



**24.-** El artículo 36 del RDL 6/2023 regula los intercambios orientados al dato y en él se prevé el establecimiento de una plataforma de interoperabilidad de datos gestionada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La regulación completa contenida en el precepto es la siguiente:

**«Artículo 36. Intercambios orientados al dato.**

1. Los sistemas informáticos y de comunicación utilizados en la Administración de Justicia posibilitarán el intercambio de información entre órganos judiciales, así como con las partes o interesados, en formato de datos estructurados.
2. La transmisión de información en modelos y estándares de datos entre órganos, oficinas judiciales y oficinas fiscales y entre estos y otros intervinientes se efectuará en los términos que se determinen en la normativa técnica de aplicación, definida por el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica que en todo caso asegurarán su confiabilidad, su posible automatización y la integración en el expediente judicial electrónico para su visualización por el usuario.
3. A tal efecto, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes pondrá a disposición para la Administración que lo requiera una plataforma de interoperabilidad de datos, de cuyo funcionamiento y gestión será responsable.
4. Las Administraciones Públicas con competencias en materia de Administración de Justicia puedan intercambiar información y utilizar la información intercambiada a través de dicha plataforma, cumpliendo la normativa técnica que se establezca.
5. Las administraciones públicas con competencia en Justicia impulsarán los intercambios previstos en el apartado anterior con fines de agilización de procesos judiciales y de eficiencia procesal, desarrollando las actuaciones oportunas, entre las que podrá estar la suscripción de convenios con entidades de derecho público o sujetos de derecho privado.
6. En el marco del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica se favorecerá la colaboración con otras administraciones públicas en la identificación de utilidades para el intercambio de información en formato de datos estructurados, así como en la definición de los parámetros y requisitos de compatibilidad necesarios para ello.



7. La plataforma de interoperabilidad de datos a la que se refiere el apartado 3 deberá ser plenamente interoperable con la Plataforma de Intermediación de Datos de la Administración General del Estado, cuando los datos sean necesarios para la tramitación de alguna administración.»

**25.-** Como ya se ha puesto de manifiesto, la regulación vigente no contiene ningún tipo de alusión al Punto Neutro Judicial, por lo que surge la duda acerca del impacto que el artículo 36 RDL pudiera tener en esta herramienta gestionada por el CGPJ.

Inicialmente, del tenor literal de este precepto se desprende que la plataforma de interoperabilidad gestionada por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes tiene una finalidad y objeto precisos definidos en el artículo 36.2 RDL: «La transmisión de información en modelos y estándares de datos entre órganos, oficinas judiciales y oficinas fiscales y entre estos y otros intervinientes se efectuará en los términos que se determinen en la normativa técnica de aplicación, definida por el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica que en todo caso asegurarán su confiabilidad, su posible automatización y la integración en el expediente judicial electrónico para su visualización por el usuario».

Esto es, a través de la plataforma de interoperabilidad gestionada por el Ministerio se realizará la transmisión de información «entre órganos, oficinas judiciales y oficinas fiscales y entre estos y otros intervinientes». El término «intervinientes» empleado en el precepto tiene un claro sentido procesal, pues sólo cabe entenderlo como referido a aquellas personas, distintas de las que integran los órganos, oficinas judiciales y oficinas fiscales, que intervienen en el proceso, esto es, las partes y aquellas otras personas que pueden considerarse que intervienen en el proceso como los testigos, peritos, etc.

Por tanto, a primera vista y de acuerdo con lo anterior, el sentido y finalidad de la plataforma de interoperabilidad parece circunscribirse a los flujos de comunicación y transmisión de información entre distintos sistemas de gestión procesal, pero esta plataforma, tal y como está regulada, no tendría como objeto canalizar las comunicaciones y transmisión de información entre los órganos judiciales (o las fiscalías) y los terceros (Administraciones públicas o personas jurídico-privadas) a los que se solicitan telemáticamente datos o informaciones necesarias para dar efecto a alguna diligencia procesal (averiguación de domicilio, averiguación patrimonial, embargo, etc.). Esta es la específica funcionalidad del Punto Neutro Judicial como herramienta gestionada por el CGPJ de implantación en todo el territorio nacional y de



uso, por tanto, común para todos los órganos y oficinas judiciales, independientemente del territorio en el que se encuentren ubicados.

**26.-** Sin embargo, de la lectura del resto de apartados del mencionado artículo 36 se desprende la duda de que realmente exista un mandato al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para crear una herramienta que sustituya al Punto Neutro Judicial.

**27.-** Estas dudas se desprenden del contenido de los apartados 4, 5 y 7 del meritado precepto. Así, el apartado 4 permite que las Administraciones con competencia en Justicia puedan intercambiar información y usar la información intercambiada a través de la nueva plataforma del Ministerio.

El apartado 5, contienen un mandato a estas Administraciones para que impulsen intercambios para agilizar los procedimientos judiciales, pudiendo suscribir convenios con entidades de derecho público o derecho privado.

Este apartado recuerda mucho a la configuración del Punto Neutro Judicial en base a convenio tanto con entidades públicas (Administraciones) como privadas (las entidades bancarias).

Y el apartado 7 ordena que esta nueva plataforma del Ministerio sea interoperable con la Plataforma de Intermediación de Datos (PID) de la Administración General del Estado. La PID, si bien no ofrece en la actualidad todos los servicios del Punto Neutro Judicial, sí contiene el acceso a varias bases de datos de las Administraciones Públicas. Según el "Catálogo de Servicios de Verificación y Consulta de Datos SCSP" de la PID, de diciembre de 2023, se ofrecen, entre otros, como servicios intermediados los relativos a "Servicios de identidad y extranjería – Dirección General de la Policía", "Servicios de Tráfico – Dirección General de Tráfico", "Servicios de Residencia / Convivencia – Instituto Nacional de Estadística", "Servicios de residencia / convivencia – Entidades Locales", "Servicios de la Dirección General del Catastro", "Servicios del Servicio Público de Empleo", "Servicios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria".

Además, no tendría mucho sentido conectar ambas plataformas si no fuese para la obtención de datos, función que ya realiza el Punto Neutro Judicial.

**28.-** En suma, aunque del apartado 1 del artículo 36 se desprende que la finalidad sería únicamente el intercambio de información entre los juzgados, tribunales, oficinas judiciales y oficinas fiscales, de los otros tres apartados parece dar a entender, o al menos surge la duda, que esta Plataforma pueda facilitar también otro tipo de intercambio que se asemeja a lo que se realiza en la actualidad a través del Punto Neutro Judicial.



De ser así, se crearía una herramienta que ya existe en la actualidad, produciendo la correspondiente duplicidad.

**29.-** Por otra parte, debe ponerse de relieve que, si como se ha expuesto anteriormente, si esa extraordinaria y urgente necesidad del RDL 6/2023 viene dada por el Plan de Recuperación y la liberación de fondos europeos, lo que está proyectado vinculado a los fondos precisamente es la integración del Punto Neutro Judicial con los sistemas de gestión procesal, enmarcado dentro del proyecto denominado “Interoperabilidad”, citado en el punto 12 de este informe.

En este sentido, el objetivo de este proyecto consiste en *«construir un modelo en el que los sistemas de gestión procesal (SGP) sean completamente interoperables, no sólo entre ellos dentro del ámbito judicial, sino también con el resto del ecosistema digital de justicia: Registro Civil, Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, Fiscalía, Institutos de Medicina Legal, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Instituciones Penitenciarias, profesionales de la Administración de Justicia, Administraciones Públicas y demás colectivos que se relacionen con la Administración de Justicia»*.

Este proyecto se materializa en 13 interoperabilidades prioritarias, entre las que se encuentra “Interoperabilidad entre sistemas de gestión procesal y servicios del PNJ”, y cuya finalidad es que la consulta al PNJ se pueda realizar desde los propios sistemas de gestión procesal.

Para ello, la Sección de Informática Judicial del CGPJ, que gestiona el PNJ, ha iniciado los trabajos necesarios para ello en colaboración tanto con el Ministerio de Justicia como con el resto de las Comunidades Autónomas con competencias. Estos trabajos, dependiendo de la Administración prestacional y del servicio, se encuentran en diversas fases, como son preproducción, producción o en curso.

**30.-** Resaltar también que el Punto Neutro Judicial, al tratarse de una herramienta fundamental para juzgados, tribunales y fiscalías, está en constante evolución, realizando mejoras técnicas, e implementando nuevos servicios.

Así, en la actualidad, se está trabajando el nuevo servicio “Averiguación 360”, y que ya ha sido anunciado en el marco del CTEAJE en una reunión celebrada el pasado 26 de octubre del 2023. Mediante este servicio, de carácter único, los órganos judiciales podrán acceder a los datos y documentos de todos los servicios del PNJ, obtener respuestas más “inteligentes” y adaptadas a sus necesidades. Este servicio ofrece una respuesta interoperable basada en la





última versión del Documento Judicial Electrónico, y contempla tanto una orientación al dato como a la persona mediante la generación de un documento PDF con los datos de la respuesta. Actualmente ya está disponible para los integradores la especificación de la operación localización domiciliaria por NIF. Este servicio permite obtener la dirección o direcciones físicas de una persona, pero haciendo comprobaciones previas sobre un posible fallecimiento, internamiento en un centro penitenciario, etc. En paralelo se está trabajando en la operación de activos financieros por NIF que permita obtener las cuentas bancarias y los saldos vinculados a una personas física o jurídica mediante la consulta a entidades financieras, AEAT, Haciendas Forales, etc.

**31.-** En suma, el RDL 6/2023 debería regular el Punto Neutro Judicial, teniendo en cuenta, además, que, si esa extraordinaria y urgente necesidad de la norma viene dada por el Plan de Recuperación y la liberación de fondos europeos, como ya se ha indicado, lo que está proyectado vinculado a los fondos es la mencionada integración, y no nuevos servicios similares a los existentes a desarrollar por parte del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

**32.-** Además, debe considerarse tres premisas fundamentales.

La primera, siendo el CGPJ el responsable de la gestión del Punto Neutro Judicial, permite garantizar la independencia judicial, sin necesidad de que ninguna Administración prestacional tenga que conocer, en su condición de intermediario, las solicitudes de información y datos que realizan los órganos judiciales tanto a entidades públicas como privadas.

La segunda, el Punto Neutro Judicial contribuye a uno de los principios del artículo 35 titulado "Principio general de orientación al dato" como contribuir a garantizar la interoperabilidad de los sistemas informáticos de la Administración de Justicia, y facilita el cumplimiento de la obligación de relacionarse con medios electrónicos.

Y la tercera, se trata de una herramienta que se utiliza en todo el territorio siendo única para los juzgados, tribunales y fiscalías.

**33.-** En consecuencia, por el legislador, en aras de garantizar una mayor seguridad jurídica, a través de la norma que considerase más adecuada al respecto se debería proceder a la modificación del artículo 36 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, incluyendo las funciones del Punto Neutro Judicial que sean descrito a través del presente informe.

Esta modificación podría tener el siguiente contenido o similar:



Donde dice:

*«3. A tal efecto, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes pondrá a disposición para la Administración que lo requiera una plataforma de interoperabilidad de datos, de cuyo funcionamiento y gestión será responsable».*

Podría decir:

*«3. A tal efecto, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes pondrá a disposición para la Administración que lo requiera una plataforma de interoperabilidad de datos, de cuyo funcionamiento y gestión será responsable.*

*Todo ello, sin perjuicio, de la plataforma de servicios del Punto Neutro Judicial, gestionada por el Consejo General del Poder Judicial, cuya finalidad consiste en permitir la consulta de información y datos entre los órganos judiciales y las entidades públicas y privadas en el marco del correspondiente procedimiento judicial.*

*El Punto Neutro Judicial también podrá prestar otros servicios, siempre y cuando contribuya a la interoperabilidad y homogenización, como la recepción de órdenes de embargo, bloqueo de cuentas y demás actuaciones financieras que sean requeridas por juzgados y tribunales, así como el envío y recepción de exhortos.*

*La interconexión al Punto Neutro Judicial se realizará mediante la adhesión de la entidad pública o privada de un Protocolo electrónico de consulta que será facilitado por el Consejo General del Poder Judicial.»*

Y eliminar o aclarar el apartado 7 donde se menciona la Plataforma de Intermediación de Datos de la Administración General del Estado, ya que su consulta se puede realizar a través del propio Punto Neutro Judicial.

**34.-** De lo contrario, podría incluso interpretarse que al no aparecer en la norma se debería “apagar” el Punto Neutro Judicial, lo cual supondría un enorme perjuicio para los órganos judiciales, si bien, la realidad no hace más que confirmar la consolidación de esta herramienta, puesto que como se ha indicado con anterioridad, se está financiando con fondos europeos su integración con los sistemas de gestión procesal, y los convenios sobre los que se sustenta siguen vigentes.

**c) Sobre el control por parte del Consejo General del Poder Judicial de los proyectos de inteligencia artificial.**



**35.-** Uno de los aspectos más relevantes del RDL 6/2023 viene dado por la inclusión del uso de la inteligencia artificial en el ámbito de actuación de los juzgados y tribunales.

Así, los artículos 56 a 58 regulan, respectivamente, las actuaciones automatizadas, las actuaciones asistidas y los requisitos comunes de las actuaciones automatizadas, proactivas y asistidas.

De todos ellos, destaca por su relevancia y posible afectación a la independencia judicial el artículo 57, que regula las denominadas actuaciones asistidas definidas como aquellas para las que el sistema de información de la Administración de Justicia genera un borrador total o parcial de documento complejo basado en datos, que puede ser producido por algoritmos, y puede constituir fundamento o apoyo de una resolución judicial o procesal. El borrador documental sólo podrá generarse a voluntad del usuario y podrá ser libre y enteramente modificado por éste. En ningún caso el borrador documental podrá constituir por sí una resolución judicial puesto que se exige que para constituir la resolución judicial o procesal se requerirá siempre la validación del texto definitivo por el juez, magistrado, fiscal o letrado de la Administración de Justicia.

El contenido de estos preceptos se completa con el principio de «la aplicación de técnicas de inteligencia artificial para los fines anteriores u otros que sirvan de apoyo a la función jurisdiccional, a la tramitación, en su caso, de procedimientos judiciales, y a la definición y ejecución de políticas públicas relativas a la Administración de Justicia», contenido en el artículo 35.1.k).

**36.-** En la actualidad, las Administraciones prestacionales se encuentran realizando proyectos de inteligencia artificial.

Algunos de ellos han sido expuestos, si bien de forma bastante escueta, en las reuniones del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), tanto en el Pleno, Comisión Permanente y grupos de trabajo.

Entre estos proyectos, mencionar:

- Resúmenes de sentencias.
- Borradores de sentencias.
- Buscador 360.
- Textualización.
- Anonimización.
- Interrogador.
- IA predictiva.



Asimismo, y como se citó en los antecedentes de este informe, se ha constituido en el CTEAJE el grupo de trabajo sobre Inteligencia Artificial, siendo uno de sus objetivos el constituir un censo de todos los proyectos que se están desarrollando, así como la finalidad de cada uno de ellos, clasificándolos en tres grupos:

- Los que no tengan impacto en la independencia judicial.
- Los que tampoco tengan impacto, pero no sean tan neutros como el primer grupo.
- Los que afecten a la independencia judicial.

**37.-** En todo caso, el uso de estas herramientas por parte de los juzgados y tribunales puede tener incidencia tanto en lo referente a la protección de datos de personales, como respecto de la citada independencia judicial, así como aquellas cuestiones que regula el Reglamento de Inteligencia Artificial, y que necesitan un control a tal efecto, por lo que procede definir a quien le corresponde.

**38.-** Por lo que se refiere a la protección de datos personales, las herramientas de inteligencia artificial pueden necesitar, para su entrenamiento, nutrirse de información y documentos que obren en el sistema de gestión procesal, por lo que puede afectar a datos personales.

En ese caso, conlleva una serie de obligaciones, conforme a lo regulado en la normativa de protección de datos personales, principalmente, el Reglamento General de Protección de Datos, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, así como los preceptos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, como pueden ser, sin ser exhaustivos, la pseudoanonimización de datos personales, el análisis de riesgos, la evaluación de impacto de protección de datos, o la posible destrucción de documentos una vez que se haya finalizado el entrenamiento.

**39.-** Puesto que como se ha indicado en el punto anterior, la información procederá del sistema de gestión procesal, utilizará datos jurisdiccionales, y se trata de herramientas que van a ayudar a la función jurisdiccional, el control del cumplimiento de la normativa de protección de datos personales debe corresponder a la Dirección de Supervisión y Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial, cuyas funciones se describen en el artículo 236 octies de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, así como aquellas otras



contenidas en el artículo 57 del Reglamento General de Protección de Datos que puedan también ser ejercidas.

Este control también tendría lugar una vez que la correspondiente herramienta de inteligencia artificial se haya puesto en funcionamiento en los juzgados y tribunales y a través de ella se produzca un tratamiento de datos personales.

**40.-** En definitiva, cuando afecte a datos personales obrantes en los sistemas de gestión procesal, que son datos jurisdiccionales, tanto en la fase de entrenamiento como su puesta en uso de la herramienta de inteligencia artificial, el control del cumplimiento de la normativa de protección de datos personales debe recaer en la Dirección de Supervisión y Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial.

Este es el criterio que ha defendido el Consejo, y al que se ha hecho alusión en los antecedentes, puesto que se puso de manifiesto en la reunión del Pleno del CTEAJE celebrada el 24 de marzo de 2022 en Avilés.

Fruto de ello, este Consejo ya se ha manifestado en alguna ocasión en relación con estos proyectos de inteligencia artificial y su cumplimiento de la normativa de protección de datos, o incluso, se ha mantenido alguna reunión con alguna Administración prestacional.

Así, recientemente, la Dirección de Supervisión y Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial se ha pronunciado, el pasado 6 de mayo del presente año, mediante la adopción del "Informe sobre protección de datos personales y el desarrollo de un instrumento de auxilio en la gestión de procedimientos concursales de personas naturales utilizando herramientas de inteligencia artificial", indicando en su apartado 15 que «Sobre los proyectos de IA que impliquen operaciones de tratamiento de datos personales que, según el art.236 bis apartado 1 de la LOPJ, estén *"incorporados a los procesos que tengan por finalidad el ejercicio de la actividad jurisdiccional"*, corresponde a esta Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos, de conformidad con el artículo 236 octies apartado 1.a, la función de supervisar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales mediante el ejercicio de la labor inspectora. Además, entre las funciones que atribuye el RGPD a las autoridades de control en el artículo 57, se encuentran la de controlar su aplicación y hacerlo aplicar».

Este informe concluye que «Cualquier proyecto de inteligencia artificial que se quiera implementar en el ámbito de la Administración de Justicia y que conlleve el tratamiento de datos personales, debe cumplir con la normativa en esta materia».



**41.-** Por lo que se refiere al control en aquellos casos que pueda afectar a la independencia judicial, así como de las obligaciones derivadas del Reglamento de Inteligencia Artificial, como punto de partida, el apartado 61 de la exposición de motivos de esta nueva norma europea se señalan las razones por las que el uso de sistemas de Inteligencia Artificial en el ámbito de la administración de justicia deben calificarse como de alto riesgo: «Deben clasificarse como de alto riesgo determinados sistemas de IA destinados a la administración de justicia y los procesos democráticos, dado que pueden tener efectos potencialmente importantes para la democracia, el Estado de Derecho, las libertades individuales y el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. En particular, a fin de hacer frente al riesgo de posibles sesgos, errores y opacidades, procede clasificar como de alto riesgo aquellos sistemas de IA destinados a ser utilizados por una autoridad judicial o en su nombre para ayudar a las autoridades judiciales a investigar e interpretar los hechos y el Derecho y a aplicar la ley a unos hechos concretos».

**42.-** De esta forma, en el Anexo III del Reglamento de Inteligencia Artificial, que recoge los supuestos calificados de alto riesgo, se contempla en el su punto 8 "Administración de justicia y procesos democráticos", letra a) «Sistemas de IA destinados a ser utilizados por una autoridad judicial, o en su nombre, para ayudar a una autoridad judicial en la investigación e interpretación de hechos y de la ley, así como en la garantía del cumplimiento del Derecho a un conjunto concreto de hechos, o a ser utilizados de forma similar en una resolución alternativa de litigios».

Lo descrito debe ser, a su vez, completado con los supuestos del punto 6 "Asuntos relacionados con la aplicación de la ley", en la medida que puedan afectar al ámbito judicial, que también califican como de alto riesgo:

a) Sistemas de IA destinados a ser utilizados por las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho, o en su nombre, o por las instituciones, órganos y organismos de la Unión en apoyo de las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho, o en su nombre, para evaluar el riesgo de que una persona física sea víctima de delitos.

b) Sistemas de IA destinados a ser utilizados por las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho, o en su nombre, o por las instituciones, órganos y organismos de la Unión en apoyo de las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho como polígrafos o herramientas similares.

c) Sistemas de IA destinados a ser utilizados por las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho, o en su nombre, o por las instituciones, órganos y organismos de la Unión en apoyo de las autoridades



garantes del cumplimiento del Derecho para evaluar la fiabilidad de las pruebas durante la investigación o el enjuiciamiento de delitos.

d) Sistemas de IA destinados a ser utilizados por las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho, o en su nombre, o por las instituciones, órganos y organismos de la Unión en apoyo de las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho para evaluar el riesgo de que una persona física cometa un delito o reincida en la comisión de un delito atendiendo no solo a la elaboración de perfiles de personas físicas mencionada en el artículo 3, punto 4, de la Directiva (UE) 2016/680 o para evaluar rasgos y características de la personalidad o comportamientos delictivos pasados de personas físicas o colectivos.

e) Sistemas de IA destinados a ser utilizados por las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho, o en su nombre, o por las instituciones, órganos y organismos de la Unión en apoyo de las autoridades garantes del cumplimiento del Derecho para elaborar perfiles de personas físicas, como se menciona en el artículo 3, punto 4, de la Directiva (UE) 2016/680, durante la detección, la investigación o el enjuiciamiento de delitos.

A este respecto, debe tenerse en cuenta la definición que sobre “autoridades garantes del cumplimiento del Derecho” contiene el artículo 3 apartado 45:

- a) toda autoridad pública competente para la prevención, la investigación, la detección o el enjuiciamiento de delitos o la ejecución de sanciones penales, incluidas la protección frente a amenazas para la seguridad pública y la prevención de dichas amenazas, o
- b) cualquier otro organismo o entidad a quien el Derecho del Estado miembro haya confiado el ejercicio de la autoridad pública y las competencias públicas a efectos de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de delitos o ejecución de sanciones penales, incluidas la protección frente a amenazas para la seguridad pública y la prevención de dichas amenazas.

**43.-** Pues bien, estos sistemas de Inteligencia Artificial destinados a la administración de justicia al ser clasificados como de alto riesgo, de acuerdo con el Anexo III, del Reglamento, quedan sujetos a un régimen específico contenido en los artículos 6 y siguientes de este Reglamento en el que se establece, entre otras medidas, que los sistemas de IA de alto riesgo deberán someterse sistemas de gestión de riesgo (art. 9), obligaciones de transparencia e información (arts. 13 y 20), supervisión humana (art. 14), requisitos de precisión, solidez y ciberseguridad (art. 15), sistemas de gestión



de calidad (art. 17) y evaluación de impacto relativa a los derechos fundamentales (art. 27).

**44.-** Además de esta calificación como sistemas de alto riesgo, debe tenerse en cuenta que, en función de su finalidad, podrían afectar a la independencia judicial. Así, ocurre, por ejemplo, en el caso de los borradores de resoluciones judiciales sobre los que este CGPJ, a través del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), el pasado 6 de mayo del presente año, mediante la adopción del “Informe sobre el desarrollo de un instrumento de auxilio en la gestión de procedimientos concursales de personas naturales utilizando herramientas de inteligencia artificial”, poniendo de manifiesto:

«33.- Esa calificación viene motivada por el hecho de incidir en el núcleo de la función jurisdiccional, esto es, “juzgar” (art.117 CE) dictando resoluciones judiciales. De hecho, la Ley Orgánica, de 1 de julio, del Poder Judicial, no contempla específica y expresamente el uso de inteligencia artificial en el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Por tanto, esta herramienta, así como cualquier otra que se desarrolle mediante inteligencia artificial aplicable al ámbito de la Administración de Justicia, no debe afectar en ningún caso la independencia judicial garantizada por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás normas procesales.

34.- Además, y como medida adicional de garantía de la independencia judicial, el CGPJ debe realizar también una supervisión, atendiendo a las competencias que posee en base al artículo 230 de la LOPJ sobre el uso de tecnologías.

El Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, dentro de las funciones del Comité Técnico Estatal de la Administración Electrónica (CTEAJE), le atribuye en el artículo 58 denominado “Requisitos comunes de las actuaciones automatizadas, proactivas o asistidas”, *“la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad, y en su caso, la auditoría del sistema de información y de su código fuente”*.

Sobre estas funciones, todas aquellas que puedan afectar a la independencia judicial, deben atribuirse al CGPJ y no al CTEAJE. El hecho de que el propio CGPJ forme parte del CTEAJE en ningún caso convalida sus funciones si las mismas afectan a la independencia judicial. Recordemos que forman parte de la composición del CTEAJE, además del CGPJ y la Fiscalía General del Estado, las Administraciones prestacionales, por lo que se trata de un órgano que representa mayormente al poder ejecutivo».





**45.-** Además de lo señalado en el apartado anterior, resaltar también las siguientes conclusiones del citado informe:

«QUINTO.- Deben ser los juzgados de lo mercantil afectados por este proyecto los que determinen los procedimientos judiciales ya concluidos que se puedan utilizar para diseñar la herramienta de IA, así como su posible uso o no en su ámbito de actuación jurisdiccional.

SEXTO.- Aunque según el protocolo, las pruebas se realizarán en el juzgado de lo mercantil de Barcelona número 11, bajo la directa supervisión del Magistrado Titular de ese juzgado y el Letrado de la Administración de Justicia, para garantizar la independencia judicial debe existir una supervisión durante todo el proyecto, tanto en la fase de desarrollo de la IA como de implementación.

Esta labor se complementará con otra posterior realizada por parte del CGPJ en base a su condición de garante tecnológico según la competencia que le atribuye el artículo 230 de la LOPJ.

Y en todo momento, debe quedar asegurado y garantizado que la herramienta de IA en ningún caso sustituirá al juez/a magistrado/a, de manera que sea cual sea los resultados que ofrezca, deben tener carácter auxiliar, salvaguardando siempre la toma de decisiones».

**46.-** De hecho, el propio Reglamento de Inteligencia Artificial no es ajeno a atribuir esta función de control y supervisión al CGPJ, puesto que el apartado 8 de su artículo 74 contempla la posibilidad de que los Estados miembros, respecto a los sistemas de alto riesgos del Anexo III puntos 6, 7 y 8, entre los que se encuentran los que afectan a la justicia, puedan designar como autoridades de vigilancia de mercado a los efectos de la citada norma, bien a las autoridades de control encargadas de la protección de datos competentes con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679 o la Directiva (UE) 2016/680, bien cualquier otra autoridad designada con arreglo a las mismas condiciones establecidas en los artículos 41 a 44 de la Directiva 2016/680. Pues bien, entre ellas, se encuentra precisamente la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del CGPJ, por lo que podría designarse al CGPJ, con las funciones de controlar el cumplimiento del Reglamento de Inteligencia Artificial sobre aquellas herramientas de inteligencia artificial que afecten a los juzgados y tribunales.

Y todo ello, sin perjuicio, de que por la vía de lo contemplado en el artículo 230.1 el CGPJ puede realizar los controles que considere oportunos sobre aquellos programas de inteligencia artificial puestos a disposición de los miembros de la carrera judicial, y que incluso puedan afectar a la



independencia judicial, pudiendo determinar la obligatoriedad o no de su utilización.

**47.-** En consonancia con lo descrito anteriormente, el CTEAJE, en el documento "Política de uso de la inteligencia artificial en la Administración de Justicia", a aprobar en la próxima reunión de su pleno a celebrar el 21 de junio de 2024 en Zaragoza, en el punto 1.6 "Responsabilidades y control de la IA" se recoge lo siguiente:

"Deben determinarse las diferentes responsabilidades que conlleva la IA en la Administración de Justicia. Así, se puede diferenciar entre:

Con relación al uso de la IA: el responsable de su uso será el juzgado, tribunal, oficina judicial o fiscalía, y dentro de cada uno de ellos, la persona que realice una utilización de efectiva. Asimismo, en los servicios ofrecidos a la ciudadanía o a los profesionales de la justicia, lo será la propia persona usuaria del mismo.

Con relación al desarrollo e implementación de sistemas de IA, la Administración prestacional correspondiente.

Con relación al control de calidad de la IA y auditoría. Dependerá de:

- Si afecta al ejercicio de la función jurisdiccional, y, por consiguiente, a la independencia judicial, le corresponde, conforme a la LOPJ, al Consejo General del Poder Judicial. La vigilancia algorítmica de los sistemas susceptibles de afectar a la independencia judicial requerirá por parte del CGPJ de la recopilación y análisis de datos generados por algoritmos para evaluar su desempeño, identificar posibles sesgos, errores o comportamientos no deseados, y garantizar la transparencia y responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial.
- Si no afectase, le corresponde, conforme al RD Ley 6/2023, al CTEAJE o a la administración prestacional, según el ámbito de aplicación de dicho sistema.

**48.-** En definitiva, los programas de inteligencia artificial que afecten a la Administración de Justicia, son calificados por el Reglamento de Inteligencia Artificial como de alto riesgo, pudiendo, según su finalidad, a la independencia judicial, siendo necesario su control por parte del CGPJ.

#### **d) Sobre la posible emisión de juicios por internet "en abierto".**

**49.-** El artículo 66 del Real Decreto-ley regula la emisión de los actos de juicio y vistas electrónicos, con este contenido:



«1. Los actos de juicio, vistas y otras actuaciones que de acuerdo con las leyes procesales se hayan de practicar en audiencia pública, cuando se celebren con participación telemática de todos los intervinientes, se retransmitirán públicamente conforme a los aspectos o especificidades técnicas que se establezcan por el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica.

Los sistemas de información y comunicación podrán establecer diferentes niveles de seguridad y acceso del público a la retransmisión.

En los casos del artículo 138.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; 681.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o en cualquier otro en el que la ley procesal permita la restricción de la publicidad, el juez o tribunal podrá acordar la no retransmisión en la forma prevista por la ley procesal.

2. En los actos de juicio, vistas y audiencias celebradas con presencia física en la sala de vistas de alguno o algunos de los intervinientes, y en aquellos en los que la publicidad quede garantizada mediante el acceso abierto a la sala de vistas, el juez o tribunal podrá acordar mediante auto la no retransmisión en los casos del apartado 1, párrafo tercero y además cuando lo considerase estrictamente necesario en atención a las circunstancias concurrentes.

3. Asimismo, en el ámbito penal, de acuerdo con el artículo 682 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juez o tribunal, previa audiencia de las partes, podrá restringir la presencia de los medios de comunicación audiovisuales en las sesiones del juicio y establecer limitaciones a las grabaciones y toma de imágenes, a la publicidad de informaciones sobre la identidad de las víctimas, de los testigos o peritos o de cualquier otra persona que intervenga en el juicio.

4. En las sedes judiciales electrónicas se publicará el listado de los actos de juicio, vistas y audiencias a celebrar por cada órgano judicial, y la forma de acceso a los mismos a efectos de publicidad.

5. En el caso de las actuaciones orales que se celebren ante el letrado o letrada de la Administración de Justicia se aplicará lo previsto en los apartados anteriores.

Los letrados o letradas de la Administración de Justicia podrán acordar mediante decreto la no retransmisión en los casos previstos en este artículo en materias de su exclusiva competencia».



Este artículo se complementa con el artículo 67 “Control sobre la difusión de actuaciones telemáticas”, que también abordaremos con posterioridad.

**50.-** Con carácter previo, y antes de analizar ambos preceptos, conviene recordar que la derogada Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, contenía un mandato en su Disposición final tercera para que el Gobierno presentara un proyecto de ley que regulase de manera integral el uso de los sistemas de videoconferencia en la Administración de Justicia, que nunca tuvo lugar, y que ahora, en una cuestión tan compleja, parece tratar de regularse y solventarse únicamente con dos artículos del Real Decreto-ley 6/2023.

**51.-** Del artículo 66 transcrito, de manera resumida, se extrae la regla general, según su apartado 1, de la posible retransmisión en Internet en “abierto”, es decir, con un acceso de forma indiscriminada, para luego, en el mismo apartado, así como en el 2, la posibilidad de establecer restricciones o la no emisión.

Destaca también que se atribuye al CTEAJE, en el citado apartado 1, la competencia para determinar “los aspectos o especificades técnicas”, sin definir exactamente en qué consisten, y también se señala la posible existencia de diferentes niveles de seguridad y acceso público a las retransmisiones.

**52.-** A este respecto, como premisa inicial, procede recordar que la Constitución Española recoge en su artículo 120 apartado 1 el principio de publicidad de las actuaciones judiciales, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.

En consonancia con lo expresado en nuestra Carta Magna, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, consagra este principio de publicidad en diversos preceptos. Entre ellos, destaca el artículo 232:

«1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.

2. La relación de señalamientos del órgano judicial deberá hacerse pública. Los Letrados de la Administración de Justicia velarán por que los funcionarios competentes de la Oficina judicial publiquen en un lugar visible al público, el primer día hábil de cada semana, la relación de señalamientos correspondientes a su respectivo órgano judicial, con indicación de la fecha y hora de su celebración, tipo de actuación y número de procedimiento.



3. Excepcionalmente, por razones de orden público y de protección de los derechos y libertades, los Jueces y Tribunales, mediante resolución motivada, podrán limitar el ámbito de la publicidad y acordar el carácter secreto de todas o parte de las actuaciones».

Procede recordar que, sobre este principio de publicidad, este CGPJ se ha manifestado con ocasión del "Informe al anteproyecto de ley de eficiencia digital", con ocasión de lo recogido en el artículo 67 sobre la "emisión de los actos de juicio y vistas telemáticos":

«207.- Tanto la L.O.P.J. (arts. 186, 229.2 y 232) como la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 138 y 185.1) configuran la audiencia pública como el instrumento esencial a cuyo través se garantiza el principio de publicidad de las actuaciones judiciales, entendido como el derecho a la presencia indiscriminada de público -publicidad inmediata- para así evitar que el secretismo opere como pauta de actuación y fomentar, por el contrario, la confianza en la Justicia.

208.- Siendo la publicidad la regla, cabe celebrar audiencia a puerta cerrada cuando esa medida sea necesaria para proteger el orden público o la seguridad nacional o para salvaguardar los derechos fundamentales de los comparecientes, con especial consideración de los intereses de las personas menores de edad y de la vida privada de las partes, o cuando por la concurrencia de circunstancias especiales la publicidad pudiera perjudicar los intereses de la Justicia (art. 232.2 LOPJ y arts. 138.2 y 754 LEC). En el ámbito penal, a este respecto, han de citarse los artículos 681 y 682 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, refiriéndose expresamente a este último el artículo 67.3 APL.

209.- Hechas estas breves consideraciones generales resulta oportuno poner de manifiesto la imposibilidad de equiparar, a los efectos de salvaguarda del principio de publicidad, la presencia física en una sala de audiencias con la retransmisión pública e indiscriminada a que se refiere el artículo 67.1 del anteproyecto que, no obstante la referencia a las limitaciones del artículo 138.2 de la LEC a los efectos de que el Juez o Tribunal pueda "acordar la no retransmisión en la forma prevista por la ley procesal" o la prohibición de grabar, tomar imágenes o utilizar cualesquiera medios que permitan una posterior reproducción del sonido y/o de la imagen de lo acontecido, que recoge el artículo 68.2 APL, resulta inconciliable con la necesidad de salvaguardar determinados derechos».

**53.-** Sobre este principio de publicidad, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 57/2004, de 19 de abril, ha puesto de relieve que:



«Es evidente, no obstante, que la utilización de esos medios de captación y difusión visuales puede afectar de forma mucho más intensa que el reportaje escrito a otros derechos fundamentales de terceros y a bienes jurídicos constitucionalmente protegidos relativos a intereses colectivos, con los que el derecho a la libertad de información puede entrar en conflicto, que deberá resolverse conforme a las exigencias del principio de proporcionalidad y de la ponderación. En primera línea se sitúa, en este contexto, el derecho a la propia imagen (art. 18.1 CE) de quienes, de una u otra forma, intervienen en los procesos, que, sin duda, no tienen por qué ser personajes de relevancia pública. También los derechos al honor y a la intimidad personal y familiar (garantizados por el mismo art. 18.1 CE) pueden verse comprometidos por la toma y difusión de imágenes de quienes actúan en audiencias públicas judiciales de forma más grave que por la información que se produce a través del reportaje escrito o la grabación sonora. E, incluso, en determinadas circunstancias extremas, como destaca el Abogado el Estado, el derecho a la vida y a la integridad física y moral (art. 15 CE)».

**54.-** También se ha pronunciado de manera muy clara la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, en su sentencia de 29 de noviembre de 2019, que resuelve el recurso interpuesto contra una resolución sancionadora de la Agencia Española de Protección de Datos que multaba a una Asociación con 100.000 euros por haber publicado en su web datos de salud de un sumario judicial, en cuyo Fundamento de Derecho Cuarto expone:

«En relación con la publicidad de las actuaciones judiciales se ha pronunciado ya esta Sección en su Sentencia de 6 de abril de 2006 -recurso nº. 554/2004-, que se recoge en la Sentencia de 29 de noviembre de 2013 -recurso nº. 455/2011-, del modo siguiente: *"La STS de 3 de marzo de 1995, recurso 1218/1991, señala en relación con la publicidad de las actuaciones judiciales "...que el derecho y correlativo deber de conocimiento y acceso al texto de las resoluciones judiciales se gradúa en función de tres diversos ámbitos o esferas de afectación, regida cada una por diversos criterios, a saber:*

*a) una de máxima amplitud o de afectación generalizada, que comprende al público o los ciudadanos en general, sin cualificación específica y que corresponde a la publicidad de las actuaciones judiciales desarrolladas en todo clase de procesos, que permite a aquéllos acudir a la práctica de diligencias que han de tener lugar «en audiencia pública», salvo la declaración de reserva que motivadamente*



*acuerde el órgano jurisdiccional, principio de publicidad constitucionalizado en el art. 120.1 de la Norma Fundamental y que recoge el art. 232.1 de la Ley Orgánica.*

*b) en el extremo opuesto, de máxima restricción del ámbito de conocimiento de las decisiones judiciales, se hallan los actos de notificación y comunicación de éstas, dirigidos sólo a quienes revisten la condición de parte procesal en virtud de las leyes de procedimiento, y que en cuanto a las sentencias determinan el derecho y correlativo deber de los Jueces y Tribunales a su conocimiento mediante el acto instrumental de notificación, según prescribe el art. 270 LOPJ.*

*c) ocupando una posición intermedia que sitúa la cuestión en ámbito más impreciso, se hallan las actuaciones procesales ya finalizadas, incluidas las sentencias, integradas en libros, archivos o registros judiciales, y respecto a las cuales, de una parte, el art. 235 LOPJ determina que: «los interesados tendrán acceso a los libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado, mediante las formas de exhibición, testimonio o certificación que establezca la Ley».*

*Sobre la cualidad de interesado a los a los efectos reseñados, se puntualiza en la citada sentencia que «el interés legítimo que es exigible en el caso, sólo puede reconocerse en quien, persona física o jurídica, manifiesta y acredita, al menos prima facie, ante el órgano judicial, una conexión de carácter concreto y singular bien con el objeto mismo del proceso y, por ende, de la sentencia que lo finalizó en la instancia, bien con alguno de los actos procesales a través de los que aquél se ha desarrollado y que están documentados en autos, conexión que, por otra parte, se halla sujeta a dos condicionamientos:*

*a) que no afecte a derechos fundamentales de las partes procesales o de quienes de algún modo hayan intervenido en el proceso, para salvaguardar esencialmente el derecho a la privacidad e intimidad personal y familiar, el honor y el derecho a la propia imagen que eventualmente pudiera afectar a aquellas personas; y b) que si la información es utilizada, como actividad mediadora, para satisfacer derechos o intereses de terceras personas, y en consecuencia adquiere, como es el caso, un aspecto de globalidad o generalidad por relación no a un concreto proceso, tal interés se mantenga en el propio ámbito del ordenamiento jurídico y de sus aplicadores, con carácter generalizado, pues otra cosa sería tanto como hacer partícipe o*



*colaborador al órgano judicial en tareas o actividades que, por muy lícitas que sean, extravasan su función jurisdiccional»...*".

Por otro lado, por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo al ponderar la publicidad de las sentencias con el derecho al honor, ha declarado en su Sentencia de 22 de diciembre de 2008 lo siguiente: " *La publicidad de las sentencias constituye un instrumento de garantía de la independencia de los tribunales y de su actuación conforme a Derecho, por cuanto estos principios se refuerzan mediante el conocimiento de la actuación de los tribunales por los ciudadanos, y debe considerarse estrechamente ligada a la protección de los derechos fundamentales inherentes al ejercicio de la potestad jurisdiccional por los jueces y tribunales.*

*Esta publicidad solamente puede ser restringida o limitada, con arreglo a lo establecido en la ley, cuando puede comportar el menoscabo de un derecho fundamental de los ciudadanos afectados o de un bien constitucionalmente protegido, especialmente cuando el conocimiento de los datos de carácter privado que constan en la sentencia puede dar lugar a la divulgación de aspectos de la privacidad que deben ser objeto de protección, siempre que esta divulgación no resulta amparada por el derecho a la información en el marco de la comunicación pública libre propia de una sociedad democrática.*

*En efecto, según la STC 57/2004, de 19 de abril, FJ 5 (en el mismo sentido, respecto de la publicación de las sentencias del Tribunal Constitucional, ATC 516/2004, de 20 de diciembre, FJ 1, y STC 114/2006, FJ 7), los principios de ponderación y proporcionalidad pueden llevar a la conclusión de que otros derechos fundamentales o bienes con protección constitucional deben tener prevalencia sobre la publicidad de las resoluciones judiciales.*

*Este principio es aplicado por el artículo 266.1 II LOPJ , introducido por LO 19/2003, de 23 de diciembre , según el cual «[e]l acceso al texto de las sentencias, o a determinados extremos de las mismas, podrá quedar restringido cuando el mismo pudiera afectar al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda, así como, con carácter general, para evitar que las sentencias puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes».*

Pues bien, resulta evidente que el principio de publicidad de las sentencias que contempla nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, no





resulta absoluto, frente a lo afirmado por la parte demandante, sino que encuentra límites, ya sea por referirse a quienes ostentan la condición de interesados o ya sea por la prevalencia de otros derechos o bienes que gocen de protección constitucional, como ocurre con el derecho a la protección de datos, cuestión esta última que ha sido examinada en el fundamento de derecho anterior».

**55.-** Por tanto, no se discute en ningún caso el principio de publicidad que debe regir estas actuaciones judiciales, pero se está trasladando (o comparando) un cumplimiento del mismo en sede judicial en las que pueden acudir aquellos que así lo consideren, pero de acuerdo al aforo existente, con una difusión indiscriminada a través de Internet.

Téngase en cuenta, además, que una retransmisión en abierto (dejando al margen aquellos que deban retransmitirse por ser “interés general”), debido a su acceso indiscriminado posibilita que se realicen grabaciones y se publiquen en Internet, pudiendo afectar de forma considerable a los derechos de las personas, como son intimidad, honor, imagen y protección de datos, todos ellos derechos fundamentales, derechos de por sí ya afectados por este tipo de difusión sin ningún límite.

**56.-** Además, si este principio de publicidad se tradujese en poder emitir los juicios en abierto como parece sugerir el artículo 66 del RDL 6/2023, no tendría sentido que en la actualidad se publicasen las sentencias sin datos personales, como en la práctica realiza el Centro de Documentación Judicial, o que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sancionase a aquellos que han publicado documentos judiciales con datos personales. Sobre éstos, podemos citar el PS/00379/2023, en el que la AEPD multa con 500 euros a un partido político por publicar en un blog de la plataforma Wordpress una sentencia con todos los datos personales o el PS/00493/2020, por publicar también una sentencia de la misma forma en una página web y en Facebook, siendo la multa de 6.000.

**57.-** A todo ello, cabe añadir que ningún caso el CTEAJE a través de esos “aspectos o especificades técnicas” que según el Real Decreto-ley debe establecer sobre estas retransmisiones públicas puede incidir en la actividad jurisdiccional, de manera que no puede determinar los requisitos de acceso como público.

Estos requisitos, en todo caso, deberían fijarse, por el CGPJ en base a la competencia que tiene atribuida según lo dispuesto en el artículo 570 bis apartado 8 letra a) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de junio, al afectar a la publicidad de las actuaciones procesales.



Fruto de esta reserva, el Consejo General del Poder Judicial aprobó mediante Acuerdo de 15 de septiembre de su Pleno, el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, cuyo artículo 1 establece que «La publicidad de las actuaciones judiciales de carácter procesal se ajustará a lo previsto en el artículo 232 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en las correspondientes leyes de procedimiento».

**58.-** Además, el hecho de que el artículo 67.2 prohíba la grabación, toma de imágenes o utilizar cualesquiera medios que permitan una posterior reproducción del sonido y/o de la imagen de lo acontecido, y el apartado tercero establezca la posibilidad de que el juez o tribunal imponga una multa de 180 a 60.000 sólo puede ser considerado como una medida disuasoria pero poco efectiva y compleja de poner en práctica por varias razones. Primero, son dos conductas diferentes: una la grabación, y otra su posterior reproducción. La grabación resulta imposible de controlar en los juicios “on line”, cuestión que sí se puede realizar cuando tiene lugar en la sala. Segundo, porque de publicarse una foto o grabación de un vídeo, pongamos como ejemplo, en una determinada red social, hay que solicitar los datos de la i.p a la misma (la mayoría de las redes sociales tienen su establecimiento principal en Irlanda) y luego a la operadora de telefonía para identificar quien lo ha publicado. En otras ocasiones, los que realizan la publicación se encuentran en países fuera de la Unión Europea, lo que dificulta aún más la investigación. Por tanto, en ocasiones resulta prácticamente imposible. Adicionalmente, en las hipótesis en que esa publicación se haya vuelto viral, resultan clara las dificultades insalvables para el efectivo ejercicio de la potestad sancionadora frente a cada una de las personas que han contribuido a difundirlo.

### **III. CONCLUSIONES**

**PRIMERA.-** El artículo 230 LOPJ atribuye, de este modo, al Consejo General Poder Judicial una responsabilidad basilar en la puesta a disposición de jueces y magistrados de los medios tecnológicos prestados por las administraciones con competencias en materia de administración de la Administración de Justicia en cuyo desempeño debe verificar que los elementos técnicos de los programas y sistemas no supongan un condicionamiento o alteración del estatuto jurídico de los miembros del Poder Judicial. Se puede afirmar que el Consejo desempeña, al amparo del artículo 230 LOPJ, una suerte de función de *gatekeeper* de la utilización por jueces y magistrados de los medios tecnológicos a su servicio como garante de la independencia judicial.



Asimismo, el artículo 560.1.16ª LOPJ atribuye al Consejo General del Poder Judicial la potestad reglamentaria para el desarrollo normativo de la Ley Orgánica del Poder Judicial en un conjunto de materias como órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales, publicidad de las actuaciones judiciales, publicación y reutilización de las resoluciones judiciales, habilitación de días y horas, así como fijación de horas de audiencia pública, reparto de asuntos y ponencias, entre otras. Mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria el Consejo establece para estas materias un marco normativo homogéneo y uniforme para todo el territorio que se configura, además, como exclusivo y excluyente de cualquier intervención o interferencia de otras administraciones.

Finalmente, la dimensión de tratamiento de datos personales que comporta el desarrollo y puesta a disposición de medios tecnológicos al servicio de la Administración de Justicia determina que el Consejo General del Poder Judicial deba estar presente en todo ese proceso en ejercicio de sus funciones como autoridad de control de protección de datos, al amparo del artículo 236 octies LOPJ y artículo 55 Reglamento general de protección de datos.

**SEGUNDA.-** El Punto Neutro Judicial, herramienta única para todos los juzgados, tribunales y fiscalías, utilizada en todo el territorio, permite garantizar la independencia judicial, sin necesidad de que ninguna Administración prestacional tenga que conocer, en su condición de intermediario, las solicitudes de información y datos que realizan los órganos judiciales tanto a entidades públicas como privadas.

Conforme a lo recogido en el artículo 35 “Principio general de orientación al dato” del RDL contribuye a garantizar la interoperabilidad de los sistemas informáticos de la Administración de Justicia, y facilita el cumplimiento de la obligación de relacionarse con medios electrónicos.

**TERCERA.-** El RDL 6/2023, a diferencia de la Ley 18/2011, pese a las diversas peticiones realizadas al respecto por el CGPJ, así como al hecho de que la norma justifica su extrema y urgente necesidad en el Plan de Recuperación y liberación de fondos europeos, siendo uno de los proyectos financiados la integración del Punto Neutro Judicial en los Sistemas de Gestión Procesal, ha obviado regularlo.

**CUARTA.-** El artículo 36 del RDL 6/2023 contempla una plataforma de interoperabilidad gestionada por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dada la redacción de algunos de sus apartados, surgen dudas sobre si prestará servicios similares a los que ya presta el Punto Neutro Judicial.



Este precepto debería ser modificado conteniendo un apartado dedicado al Punto Neutro Judicial con el contenido igual o similar al propuesto en este informe.

**QUINTA.-** La puesta a disposición de herramientas de inteligencia artificial para su utilización por los juzgados y tribunales puede tener incidencia tanto en lo referente a la protección de datos de personales como aquellas cuestiones que regula el Reglamento de Inteligencia Artificial, así como en la independencia judicial, debiendo producirse un control a tal efecto.

**SEXTA.-** Por lo que se refiere a la protección de datos personales, estas herramientas, tanto en su fase de entrenamiento como en su uso, deben respetar la normativa aplicable, correspondiendo, su control y supervisión, al afectar a datos jurisdiccionales, a la Dirección de Control y Supervisión de Protección de Datos del CGPJ.

**SÉPTIMA.-** El Reglamento de Inteligencia Artificial califica determinados proyectos en su Anexo III relacionados con la Administración de Justicia como de alto riesgo, debiendo cumplir una serie de requisitos que contempla norma para los calificados con este carácter.

Sobre su supervisión y control, este Reglamento contempla en su artículo 78.4 la posibilidad de que sea las autoridades de control encargadas de la protección de datos competentes con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679 o Directiva (UE) 2016/680, entre las que se encuentra la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del CGPJ, por lo que debe recaer en el CGPJ.

**OCTAVA.-** En todo caso, los proyectos de inteligencia artificial en la Administración de Justicia deben respetar la independencia judicial, por lo que aquellos que puedan afectar a la misma, el control de este respeto, así como su calidad, puede realizarse, en base al artículo 230.1 de la LOPJ, por el CGPJ, pudiendo determinar la obligatoriedad o no de su uso por parte de los miembros de la carrera judicial.

**NOVENA.-** El principio de publicidad en sede judicial, de conformidad con su configuración tanto en la Constitución, LOPJ y normas procesales, así como sentencias tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo y Audiencia Nacional, no supone su traslación con el contenido del artículo 66 del RDL 6/2023, de manera que los juicios se puedan ofrecer, como regla general, “en abierto”, permitiendo su acceso indiscriminado.

Además, no permitiría controlar quien realiza grabaciones cuestión que sí se puede cuando los mismos tienen lugar en sede judicial, siendo la aplicación



práctica del artículo 67 en relación con la posibilidad de multar a aquellos que difundan imágenes o vídeos bastante compleja sino prácticamente ineficaz.

**DÉCIMA.-** En todo caso, en base a la competencia que tiene atribuida el CGPJ según lo dispuesto en el artículo 570 bis apartado 8 letra a) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de junio, al afectar a la publicidad de las actuaciones procesales, le correspondería fijar los requisitos de acceso público a la retransmisión referidos en el artículo 66.1 del RDL 6/2023, debiendo modificarse el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales.